

## AYOTZINAPA Y LA CRISIS MORAL DE LA SOCIEDAD

El 26 de septiembre pasado, la policía municipal de Iguala, Guerrero, agredió brutalmente a un grupo de estudiantes con un saldo de seis muertos, una decena de heridos y 43 desaparecidos. Estos hechos han causado una profunda conmoción tanto en el país como en el extranjero al grado de que las principales organizaciones internacionales (ONU, Unión Europea; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.) los han condenado y han solicitado al gobierno mexicano su pleno esclarecimiento. A partir de aquel día, se han venido presentando en diversos lugares de la República (sobre todo en las ciudades de Iguala, Chilpancingo y México) una serie de manifestaciones multitudinarias; paros de actividades en las universidades demandando la aparición de los 43 normalistas; tomas de alcaldías; incendios de edificios del gobierno en Chilpancingo; interrupciones del tráfico en carreteras e inclusive, el presidente de la República recibió a los padres de familia afectados y escuchó, durante cinco horas, los dramáticos testimonios de los familiares, firmándose, al final, una minuta con los compromisos del gobierno para buscar a los desaparecidos.

Poco a poco, la opinión pública ha venido conociendo detalles de lo ocurrido aunque, hasta ahora, siguen sin responderse preguntas como: ¿Por qué los policías actuaron con esa violencia?, ¿cuáles eran sus móviles?, ¿quién les ordenó tirar a matar y quién les ordenó que desapareciera a los estudiantes?, ¿dónde están?, entre otras.

Hasta ahora, solo se sabe que los policías municipales actuaron por orden del alcalde que tenía (o tiene) relaciones con un cártel de la droga; que a los estudiantes los mataron; quemaron y tiraron sus cenizas en un río y en un basurero situado en las afueras de la ciudad de Cocula, como afirman algunos de los sicarios que participaron en ese espantoso crimen y que se encuentran detenidos. Esta última versión no ha sido aceptada por los padres de familia que están luchando en forma incansable por la aparición de sus hijos aunque los laboratorios de Innsbruck consultados por el gobierno han encontrado la coincidencia genética de uno de los jóvenes desaparecidos.

El análisis de lo ocurrido a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa nos enfrenta a una profunda crisis política y moral que tiene varios componentes: el primero de ellos es la violencia extrema que se manifiesta en la acción de los policías que, en lugar de cumplir con las normas legales en estos casos, tiran a matar, detienen y desaparecen a los estudiantes. Ahora bien, esta situación particular viene a ser la culminación de un clima de violencia que ha imperado en aquel estado desde hace años. Algunas muestras de ello han sido: la matanza del 7 de junio de 1998 en “El Charco”, la represión del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas; los asesinatos políticos como el de Armando Chavarría, precandidato a gobernador, el 29 de agosto de 2009; el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la muerte de un trabajador durante una manifestación en la Autopista del Sol, el día 12 de diciembre de 2011 y una serie de secuestros, extorsiones y asesinatos, muchos de los cuales no han sido aclarados suficientemente. Esto significa que existe poca justicia y mucha impunidad. Pero el problema es que esta violencia está ligada tanto a las autoridades como a los grupos de la delincuencia organizada. En otras palabras, en este caso se hizo evidente una simbiosis entre el narcotráfico y los representantes del gobierno. Pero además, se hizo visible también su relación con la política partidaria. Esta situación implica una doble pérdida para el ciudadano: de la seguridad que debería proporcionar el Estado y de la confianza que podrían tener en los partidos políticos como sus representantes.

Lo más grave es que dicha situación no sólo es privativa de aquel estado de la República sino que se presenta también en otros más.

Pero ¿cuál es la razón por la cual se ha producido este fenómeno en nuestro país? Dos posibles respuestas pueden ser: por un lado, la cantidad de consumidores existentes en los Estados Unidos y por otro, su acción corruptora. En relación al primer aspecto, es conocido que uno de los más importantes factores (aunque no el único) del consumo de drogas son las guerras que ha llevado a cabo el gobierno norteamericano en Irak y Afganistán. Este gobierno ha conducido a su juventud a la confrontación con la muerte tanto de los “enemigos” como de sí mismos. A ello, agreguemos el ambiente de violencia y alienación que ha llevado a la locura a algunos jóvenes que han irrumpido en sus escuelas y abierto fuego en contra de sus propios compañeros, así como la existencia de un gran negocio de venta de armas cada vez más sofisticadas y mortíferas. Al poder económico obtenido por la venta de las drogas por las organizaciones criminales, se suma el poder que les otorga la posesión de dichas armas. Agreguemos a lo anterior, la creación de una pernicioso subcultura que rodea al narcotráfico como un halo protector: corridos para festinar las hazañas de los “héroes” que se han opuesto al gobierno; ritos satánicos; cultos a la “Santa Muerte” y la inversión de valores entre

niños y jóvenes entre los que se difunde una filosofía de la vida basada en un pragmatismo (vive lo mejor que puedas aunque solo sea por hoy); un hedonismo (goza lo que puedas) y un nihilismo (no importa morir). Todo ello nos conduce al otro factor que es la corrupción en el ámbito de la política. Si la idea es “ganar puestos y posiciones a toda costa” la ética o los principios desaparecen. Pero sumemos a esto los errores terribles que cometió el presidente Felipe Calderón (2006-2012) al creer que la inclusión del Ejército Mexicano y la Marina en la guerra en contra del narcotráfico podría acabar con su pernicioso influencia. Los resultados están a la vista: decenas de miles de muertos y ningún avance. El problema de la corrupción está vinculado a una falta de un aparato judicial en nuestro país que lleve a cabo la justicia hasta sus últimas consecuencias.

Por todo lo anterior, podemos decir que la desaparición de los estudiantes normalistas ha constituido el detonante de una acumulación de impunidades e injusticias y el clamor ciudadano por que se ponga un freno a la violencia y se restablezca la paz y la seguridad.

Pero existe todavía otra consideración que podemos hacer. En nuestro país, millones de personas quieren una sociedad mejor y en el caso del campo, las normales rurales, que fundó el general Lázaro Cárdenas en 1935, han representado un ascenso para los hijos de los campesinos e indígenas que no desean seguir por la vía del narcotráfico o de la política pero que tampoco pueden ir a las ciudades a estudiar una profesión debido a la falta de dinero. Lo único que queda (quedaba) es (era) vivir en su escuela, estudiar, labrar la tierra, terminar sus estudios y obtener una plaza de profesor, prestación que está suspendida por el gobierno.

Frente a esta situación, ¿qué se debería hacer?

Creemos que el ciudadano puede hacer mucho con información, conciencia y organización. Es obvio que se deben esclarecer plenamente los hechos y llevar ante la justicia a todos los involucrados pero también urge que cambie la estrategia neoliberal que ha producido una polarización extrema entre ricos y pobres. Es obvio que se tiene que fortalecer la procuración y ejecución de la justicia y lo es también que se debe erradicar la corrupción política y muchas otras cosas más, sin embargo, se puede empezar por crear muchas organizaciones (pequeñas, medianas o grandes) que exijan el cumplimiento de las leyes desde lo más elemental hasta lo más complicado.

Lo que se requiere es luchar por una nueva moral pública; una nueva educación y una nueva política. Los ciudadanos deben adquirir conciencia de lo que está en juego para el país y para ellos mismos: un país en donde mande la simbiosis a que hemos referido o un país en donde el pueblo exija que se cumpla la ley y la política económica sea para las mayorías y no sólo para unos cuantos.

Finalmente, los hechos de Iguala y Cocula, tocaron una de las fibras

más sensibles de los seres humanos cuando se trata de la desaparición de un hijo en cualquiera de las circunstancias en que ocurra. Es por ello que los ciudadanos mexicanos se han identificado con la lucha de los padres y es por ello que el gobierno debe saber que los padres no se detendrán hasta el pleno esclarecimiento de los hechos y la realización de la justicia.

Las grandes manifestaciones del pueblo y en especial de su juventud, deben ser transformadas en luchas por demandas concretas para impedir que estos actos vuelvan a repetirse.

(GVL)

*José Antonio Robles (1938-2014)*

La revista *dialéctica* participa con profunda pena el fallecimiento del doctor José Antonio Robles, distinguido y estimado filósofo mexicano y envía a sus familiares y amigos su más sentido pésame.